

Estados- Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogaszon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arceaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. María del Castillo Velazco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, Secretario.

Son copias que certifico.—México, Julio 11 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

JUICIO CIVIL promovido por el C. Doctor Manuel Ortega Reyes, ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca, en representación del ex-general Manuel Gonzalez y su esposa Doña Laura Mantecon, contra la providencia del C. Gefe superior de hacienda del Estado que mandó asegurar los bienes del expresado Gonzalez por haberse complicado en la actual revolucion.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El apoderado de los Sres. D. Manuel Gonzalez y Doña Laura Mantecon, solicitó el amparo de la Justicia Federal en contra de los procedimientos de esta Gefatura de Hacienda que mandó asegurar las casas de la propiedad del primero de los nombrados, por la responsabilidad civil que ha contraído como caudillo de una banda que vivaquea por los llanos de Apam.

El quejoso alega, que una de las casas aseguradas pertenece á Doña Laura Mantecon, esposa del Sr. Gonzalez, que no debe reputarse por esto cómplice ni responsable de sus actos; sostiene que la ley de 31 de Enero de 1870, que funda los procedimientos de la Gefatura de hacienda, no está vigente; que dicha Gefatura violó por lo mismo los artículos 22, 50 y 16 de la Constitución Federal; que no siendo autoridad judicial, no fué competente para decretar el seguro de los enunciados bienes; que la ley de facul-

tades extraordinarias de 2 de Diciembre de 1871, declaró vigente la de 6 de Diciembre de 1856 y que en consecuencia, no habiendo proceso instruido en contra del Sr. Gonzalez, no pueden haber existido los datos que esa ley considera necesarios para mandar asegurar los bienes de los rebeldes, y concluye insistiendo en el amparo solicitado, extendiéndolo hasta en contra del decreto de 31 de Enero de 1870, que parece ha sido en esta materia la norma y la guía de la Gefatura de hacienda.

Desde luego se comprende que la queja del apoderado del Sr. Gonzalez se basa en supuestos falsos y en alegaciones sofisticas que no sorprenderán la rectitud del tribunal ni alucinarán siquiera á los que estén interesados en el desprestigio de las leyes que castigan muy justamente el delito de rebelion.

Empiezo por reconocer, que si la Sra. Doña Laura Mantecon de Gonzalez prueba en tiempo y forma el derecho que alega á una de las casas aseguradas, se le debe devolver inmediatamente, porque la ley no quiere ni ha podido querer jamas que los inocentes sufran las consecuencias de ajenos yerros. Esto no solo lo aconseja la razon, sino lo prescribe el buen sentido, y lo exige la sociedad que se alarmaria al ver que las leyes penales se aplicaban sin discernimiento y sin prudencia.

Pero no sucede lo mismo respecto del Sr. Gonzalez cuya conducta es notoriamente rebelde al gobierno Constitucional y cuyos actos revolucionarios vienen comprobados mas de lo necesario con los partes oficiales que todos hemos leído en los periódicos, y que el C. Ministro de la guerra confirma en su nota de 23 de Marzo último que corre á fojas 12 de este expediente.

Es cierto que el C. Ortega y Reyes sostiene que no hay tal notoriedad, y que aunque existiera, no debia haber sido el Gefe de hacienda el que asegurara los

bienes del rebelde, sino la autoridad judicial respectiva, una vez que la ley de 6 de Diciembre de 1856 preceptúa que debe haber causa instruida para que se proceda al seguro: es cierto que aquel ciudadano, apoyándose en el artículo 16 de la Constitución, avanza hasta decir, que tratándose de seguros, secuestros ó embargos, solo es competente la autoridad judicial; pero estos razonamientos sin vigor, aducidos con la conciencia de que son inoportunos é inconvenientes, desaparecerán con solo fijarse en las reflexiones que siguen:

Lo primero que tiene que sostener el que se honra al llevar la voz de la Federación, es la vigencia de la ley de 31 de Enero de 1870.

Contra esta afirmación presenta el quejoso dos observaciones, diciendo que no rige: porque no lo declaró así la ley de 2 de Octubre de 1871 y porque es anticonstitucional.

De seguro el C. Ortega, preocupado como debe estarlo por la defensa de su poderdante, se olvidó de que las leyes no se derogan jamás, por el hecho de no estar declarándolas vigentes momento por momento.

Si el 31 de Enero, el Ejecutivo federal, con facultades bastantes determinó la manera de hacer efectiva la responsabilidad civil de los revolucionarios; si en todo el año de 1871 vinieron practicándose esos preceptos y consumándose los seguros de los bienes ordenados allí; si el 28 de Noviembre del propio año el Gobierno Supremo excitó el celo de los empleados federales para que cumplieran con la ley referida; si en todas las partes de la República en donde ha habido revolución, los bienes de los rebeldes se han asegurado convenientemente; si es común y sabido que la ley tiene fuerza perpetua mientras no se deroga; (ley 11, tít. 2, lib. 3, N. R.) si es notorio que los preceptos soberanos deben observarse literalmente, sin que pueda ad-

mitirse la excusa de que no están en uso; si es cierto que el derecho público prescribe que cese una ley solo cuando han cesado los motivos que la hicieron dictar, tendremos que convenir que la ley de 31 de Enero está viva y que sus preceptos deben ser obsequiados inmediatamente.

Lamentable es el extravío de los que aseguran que dicha ley no rige, solo porque no se hizo memoria de ella en el decreto de 2 de Diciembre de 1871, y mas lamentable seria que el tribunal confirmara tan absurda doctrina.

Es verdad que el legislador de Diciembre quiso que se juzgaran los reos políticos con arreglo á la ley de 1856, pero no mandó que solo esta fuera la norma de los juicios, ni relevó á los Jefes de hacienda de las claras obligaciones que les impuso el decreto de Enero. Es verdad que la ley de Diciembre no declaró vigente la que nos viene ocupando; pero tambien es cierto, que esa declaración hubiera implicado una redundancia risible cuando hacia cuatro dias apenas que el Ejecutivo federal habia recordado su puntual cumplimiento.

Extravagante seria sostener, que el silencio del legislador envolvía la derogación de las leyes preexistentes, y hasta ridículo venir á declamar que la ley de Enero de 1871 debe juzgarse derogada solo porque no plugo al Soberano determinar en Diciembre de 1871 que estaba vigente.

El C. Ortega dice, que la ley citada ya tantas veces, no debe regir porque es anticonstitucional, y se olvida de que fué dictada en uso de facultades extraordinarias concedidas segun el tenor expreso del Código Federal y para que rigiera precisamente en un período de zozobras para cuyo remedio no basta nuestro Código político.

Se olvidó tambien, de que la ley de 2 de Diciembre permite que cualquiera pueda ser molestado en su persona, domicilio y posesiones, mediante manda-

miento de la autoridad competente (artículo 5º de la ley de Enero 17 de 1870).

Se olvidó de que no es cierto que solo haya competencia en la autoridad judicial, cuando se trata de decretar seguros, embargos, etc., porque el idioma dice, que es competente el que es idóneo, hábil, ó capaz para entender en un asunto, y la ley de 31 de Enero dió esa capacidad á los Jefes de hacienda (artículo 2º).

Se olvidó de que jamas se ha juzgado anticonstitucional el principio por todos respetado, de que la Hacienda pública no puede pelear despojada.

Se olvidó, de que en el caso presente el Jefe de Hacienda no hizo sino asegurar los bienes de su deudor, dejando expedita la accion de la justicia que de otra manera podria quedar burlada; y que este seguro, que hoy alarma tanto porque se trata de un rco político, se decreta á cada paso por todos los Jefes de Hacienda contra los que se reputan deudores del fisco, aun cuando ellos nieguen la deuda, y lo decretan los Administradores del papel sellado en contra de sus deudores inconfesos, y lo proveen los Recaudadores de contribuciones en contra de los causantes que rehusan, justa ó injustamente el pago, y hacen lo mismo los Administradores de alcabalas y cuantos mas exactores pesan sobre la sociedad, porque en todas épocas y bajo todas las leyes se ha juzgado indeclinable el gran principio de que la Hacienda pública nunca debe estar expuesta á la insolvencia de aquellos con quienes litiga.

¿Qué extraño es, pues, que hoy en virtud de una ley preexistente dictada para un período anormal se aseguren los bienes del que la fama pública reputa rebelde?

¿Quién ha dicho que solo la autoridad judicial puede decretar seguros, cuando la ley de Enero concede esa facultad á los Jefes de Hacienda?

Precisamente para asegurar los intereses federales, se suspendió el vigor de la Constitucion; precisamente la ley que nos preocupa vino á llenar la suprema aspiracion de la sociedad, arrancando de las manos de los rebeldes los bienes que emplean en destruirla y explotarla.

Querer que una ley no se observe en esta época, solo porque no es constitucional, es aducir un argumento que no honra al que lo propone.

Si la Constitucion, que es la primera de nuestras leyes, no rige al presente, la ley de Enero no puede serle contraria, no hay colicion una vez que está suspenda la observancia de aquel código.

Así, pues, el Señor Gonzalez bien puede ser molestado en sus posesiones, en virtud del mandamiento de seguro que proveyó el C. Jefe de Hacienda, único competente al efecto segun el tenor expreso de la ley de 31 de Enero de 1871 (artículo 2º). De esta manera no se ha violado el artículo 16º de la Constitucion, suspenso por el artículo 5º de la ley de 17 de Enero de 1871.

No se ha violado tampoco el artículo 27 de la Constitucion federal, porque no se trata de ocupar la propiedad de Gonzalez por motivo de utilidad pública, sino de asegurar sus bienes para que respondan por los daños y perjuicios que causa la revolucion que acaudilla, ni se infringió el artículo 22 porque con el seguro decretado no se adjudican los bienes de Gonzalez al fisco, sino se afianza para el porvenir la solvencia del que hoy causa hondos perjuicios á la sociedad mexicana.

Por último, Señor, y para no dejar desapercibido el menor de los argumentos del quejoso, volveré á decir que no es de la exclusiva competencia de la autoridad judicial el dictar los seguros de que venimos hablando, y que aunque esto no fuera verdad, la violacion en su caso del artículo 5º del Código federal no daría derecho al quejoso para solicitar el am-

paro, una vez que este solo se concede cuando se atropellan las garantías individuales, y la division de los poderes es una garantía política que nunca puede reputarse consignada solo en favor de los individuos que forman la gran sociedad mexicana.

En consecuencia, pido á vd. que decrete que es improcedente el amparo solicitado, condenando al quejoso al pago de la multa de la ley. Si esto parece duro, no hago sino ser el intérprete de la sociedad que se cansa ya de las revueltas, y quiere y exige que los que mandan sean inflexibles y severos hasta obtener cumplida reparacion de todos los perjuicios que causan nuestras continuas guerras civiles.

Oaxaca, Junio 17 de 1872.—*Agustín Castañeda.*

SENTENCIA del C. Juez de Distrito.

Juzgado de Distrito.—Oaxaca, Julio 3 de 1872.—Visto el presente juicio promovido por el C. Dr. Manuel Ortega Reyes, en representacion del ex-general D. Manuel Gonzalez y su esposa Doña Laura Mantecon, solicitando amparo contra la providencia del C. Gefe superior de hacienda del Estado, que mandó secuestrar los bienes del citado ex-general, sin prueba de que haya ocupado bienes de la Nacion ó de los particulares, y aplicando el decreto de 31 de Enero de 1870, sin estar vigente legalmente y ser ademas anticonstitucional: Visto asimismo el informe de la autoridad ejecutora del acto reclamado, en el que manifiesta, que por haberse complicado Gonzalez en la revolucion y en virtud de las leyes de 22 de Febrero de 1832, 6 de Diciembre de 1856, 3 de Noviembre de 1858 y 31 de Enero de 1870, procedió al aseguramiento de los bienes del mismo Gonzalez: Visto tambien el pe-

dimento del C. administrador de Correos que llevó la voz fiscal en el presente juicio, por hallarse impedido el C. Promotor, pretendiendo se deseché el amparo solicitado por improcedente: los alegatos de las partes, y todo lo demas que de lo actuado consta y ver convino:

Considerando: que el fundamento capital de la pretension del quejoso, sobre no estar vigente el referido decreto de 31 de Enero de 1870, es enteramente sofístico, porque siendo una ley de carácter permanente, como se colige aun de su mismo preámbulo, que de un modo tan contraproducente ha citado el interesado; mientras otra ley expresa y posterior no la derogue, debe reputarse vigente, conforme á la ley 11, tít. 2º, lib. 3º de la Nov. Rec., que el propio quejoso se ha encargado de copiar literalmente en la nota 2ª de su alegato: que tampoco debe tenerse por derogada, por simple inferencia como anticonstitucional, porque tal interpretacion, por demas aventurada, es tambien infundada, puesto que el aseguramiento de bienes no importa una expropiacion, y la competencia de la Gefatura de hacienda, establecida para el efecto por el art. 1º de la enunciada ley, provee al caso del art. 16 de la Constitucion, supuesto ademas que aquella oficina ha expedido la órden respectiva, y por tanto no ha podido invocarse tal artículo constitucional, ni el 27, únicos que se dice pugnan con la ley en cuestion, ni menos el primero, estando limitado á su primera parte por el art. 5º de la ley de 17 de Enero de 1870, declarado vigente, por la de suspension de garantías de 2 de Diciembre último.

Considerando: que teniendo conocimiento la Gefatura de hacienda de hallarse el ex-general Gonzalez rebelado contra el Supremo Gobierno, acaudillando una banda de disidentes, este dato funda suficientemente el procedimiento del seguro de sus bienes, por la responsabilidad pecuniaria en que incurra, sin

que sea necesaria la plena justificación de haber tomado violentamente bienes de particulares ó corporaciones, ó en general del carácter que expresa la ley de 22 de Febrero de 1832, pues el aseguramiento solo tiene por objeto prevenir el éxito del juicio sobre responsabilidad civil del rebelde, que de otro modo se haría ilusorio, y su carácter meramente precautorio, se confirma por el art. 5º de la propia ley de 31 de Enero de 1870, que previene, que verificado el pleno aseguramiento de los bienes del responsable, se pase copia del expediente al juez federal que corresponda, que será el único competente para conocer y decidir las cuestiones que se presenten.

Considerando: que no habiendo aún proceso contra Gonzalez, y siendo posterior la ley de 31 de Enero de 1870 á la de 6 de Diciembre de 1856, que lejos de contradecirse coadyuvan al mismo fin, la cita que de esta última hace el quejoso, es ineficaz para invalidar los actos que emanen de la primera, como infundadamente pretende.

Considerando: que el simple aseguramiento de bienes no envuelve declaración alguna definitiva sobre la propiedad, ni es confiscación, ni multa excesiva, y por tanto es igualmente inconducente la invocación del artículo 22 de la Constitución.

Considerando: que siendo el aseguramiento un acto puramente administrativo prevenido por la ley de 31 de Enero de 1870, es del resorte exclusivo de la Jefatura de hacienda, sin que haya lugar á contienda de juicio ni otras funciones propias del poder judicial, por lo que tampoco tiene lugar la violación del artículo 50 de la Carta federal, el que por otra parte no está comprendido en el título 1º sección 1ª del mismo Código.

Considerando, por último: que el aseguramiento no es propiamente una pena, ni menos puede ser trascendental; porque los bienes asegurados son conside-

rados de la propiedad del ex-general Gonzalez, según el informe del C. Jefe superior de hacienda, sin perjuicio de los derechos de tercero, y aunque en la representación de Doña Laura Mantecon y de su hijo Manuel Gonzalez pudiera aducirse algun derecho, esto debía hacerse en la vía y forma correspondiente, conforme al artículo 5º de la citada ley, y no en el presente juicio, sin deber entorpecerse las determinaciones dictadas con arreglo al artículo 1º, que solo tienden á asegurar los intereses de la sociedad. Por tales consideraciones y fundamentos legales, y de conformidad con el pedimento fiscal, la Justicia federal declara: Primero: que no ampara ni protege al ex-general D. Manuel Gonzalez ni á su esposa Doña Laura Mantecon, contra la providencia del C. Jefe superior de hacienda, que mandó asegurar los bienes del primero, por haber obrado aquel funcionario con arreglo á sus facultades. Segundo: se condena á la parte de Gonzalez al pago del *mínimum* de la multa establecida por el artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869. Tercero: Publíquese este fallo por los periódicos "Semanario Judicial" y "Diario Oficial" de la Federación, y remítase original este juicio á la Suprema Corte de Justicia de la Unión, para los efectos de la ley. Hágase saber. El C. Juez de Distrito, Lic. Joaquín Mauleon así lo decretó y firmó: doy fé.—*Joaquín Mauleon*.—*Rodolfo Sandoval*, secretario.

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 16 de 1872.—Visto el juicio de amparo que en 24 de Mayo del corriente año promovió ante el juez de Distrito del Estado de Oaxaca el Dr. D. Manuel Ortega Reyes, en representación de D. Manuel Gonzalez y de su mujer

D^a Laura Mantecon, exponiendo que la Gefatura de hacienda federal en ese Estado, informada de que Gonzalez se habia lanzado á la revolucion, procedió á secuestrar una casa de este, situada en la ciudad de Oaxaca, calle de la Lotería, y otra de la Sra. Mantecon situada en la propia ciudad frente al Convento de Capuchinas, siendo la última comprada por la Sra. para su hijo D. Manuel Gonzalez, con cuyo procedimiento, aquella oficina habia violado las garantías que otorgan á los representados del promovedor los artículos 16 y 27 de la Constitución de la República. Visto el informe de la Gefatura de hacienda responsable del acto reclamado, manifestando que el aseguramiento de los bienes de D. Manuel Gonzalez, se decretó en virtud de las leyes de 22 de Febrero de 1832, 6 de Diciembre de 1856, 3 de Noviembre de 1858 y 31 de Enero de 1870, habiendo pedido informe para no proceder con lijereza, al Ministerio de Guerra sobre la conducta de dicho Gonzalez en la última revolucion. Visto el pedimento del Administrador principal de correos, llevando la voz fiscal por el impedimento del Promotor, el alegato del apoderado de los quejosos y la sentencia del Juez de Distrito al principio referido, con todo lo demas que de autos consta, fué indispensable tener presente y ver convino.

Considerando: Primero; que la Gefatura de hacienda de Oaxaca procedió al secuestro de bienes de Don Manuel Gonzalez, sin justificarse debidamente que estuviera comprendido en las disposiciones relativas á los que sostienen con las armas una causa revolucionaria, ocupando intereses de particulares ó públicos, y que antes por el contrario, en la comunicacion del Ministerio de Guerra, constante en el expediente dirigida para dar el informe que pidió la Gefatura de hacienda, no se dice que Gonzalez mandaba una fuerza de revolucionarios, sino de delinquentes del orden comun, en cu-

yo caso, el procedimiento á que pudiera haber lugar deberia ser conforme á las leyes respectivas y no segun las disposiciones especiales citadas: Segundo: que aun en el supuesto de que procediera en derecho el secuestro de bienes de D. Manuel Gonzalez, no debia extenderse á los que constase desde luego ser de otra persona como se alegó en el presente caso, que una de las fincas secuestradas es de la Sra. mujer é hijo de Gonzalez sobre lo cual no se procuró la justificacion necesaria para el procedimiento;

Por lo expuesto, y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución de la República mexicana y de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente:

Primero: es de revocarse y se revoca la sentencia que el juez de Distrito del Estado de Oaxaca pronunció en la capital del mismo Estado á 3 del presente mes, declarando: "Que la Justicia federal no ampara ni protege al ex-general D. Manuel Gonzalez ni á su esposa D^a Laura Mantecon contra la providencia del C. Gefe Superior de hacienda que mandó secuestrar los bienes del primero, por haber obrado aquel funcionario con arreglo á sus facultados; y que se condena á la parte de Gonzalez al pago del minimum de la multa establecida por el artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, y

Segundo: la Justicia de la Union ampara y protege á D. Manuel Gonzalez y á la Sra. su mujer D^a Laura Mantecon, contra la providencia expresada de la Gefatura, en virtud de la cual se les mandaba secuestrar las dos casas que menciona su apoderado, pues con esa providencia se han violado en sus personas las garantías que otorgan los artículos 16 y 27 de la Constitución federal.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes, publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los Ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Arza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis Malanco*, secretario.

Son copias que certifico. México, Julio 26 de 1871.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.—Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan por los indígenas de Huiramba, Cristóbal y Faustino Rangel y otros, por creer que el Prefecto Político de Morelia ha invadido las facultades del poder Federal al repartir entre los miembros de la comunidad de dicho pueblo, los terrenos que poseian proindiviso.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

Algunos indígenas de Jesus Huiramba piden amparo de garantías, por virtud de incluirse por la Prefectura de esta ciudad conforme á la disposicion del Gobierno del Estado, en el reparto de terrenos, algunos que habian antes sidoles adjudicados por la misma Prefectura, conforme á la ley de 25 de Junio.

En primer lugar advierte este ministerio, que el C. Prefecto, segun aparece de las presentes diligencias, no obró arbitrariamente; pues no hizo mas que cumplir una disposicion de su superior, como lo es el Ejecutivo del Estado; y en consecuencia, en caso de que alguna responsabilidad existiera, seria del Gobierno del mismo, mas nunca del Perfecto; y el amparo deberá pedirse, por tanto, contra la superioridad que dió la determi-

nacion, mas no contra el Gefe Político que no hizo mas sino que ejecutarla.

En segundo lugar, que la determinacion del Gobierno no viola ninguna de las garantías que otorga la Carta fundamental de la República, y por tanto, aun cuando el amparo se pidiera por los procedimientos del Gobierno, no tendria lugar aquel.

Lo que se vé claramente es, que los indígenas quejosos pretenden ser de mejor condicion que los demas, pues pretenden ser dueños de los terrenos que designan, y ademas hacer que en el reparto se les considere con otros, y así enriquecer de una manera odiosa.

Esto no es equitativo; y las leyes generales, si bien han querido favorecer á la clase indígena en general, no han pretendido hacer bien á unos con perjuicio de los otros, pues esto daria márgen á rencillas entre ellos mismos, y á desagradados lamentables y de trascendencia.

Siendo, pues, la determinacion del Gobierno del Estado justa y equitativa; no atacándose con ella ninguna garantía Constitucional, y no siendo el amparo pedido contra el Gobierno, sino contra el C. Prefecto, el cual no aparece que haya obrado de una manera arbitraria, pues antes bien, para no hacerlo así, ocurrió al Gobierno consultándole sobre lo que deberia hacer; el Promotor Fiscal pide se declare por vd. que la Justicia de la Union no ampara á Cristóbal y Faustino Rangel, Juan Gallegos, Andres y Donaciano Tapia, Joaquin Montañez, Sacramento Cruz, Anacleto Montañez, Victoriano Mendez, María Gregoria de la Cruz y Antonia García, de los procedimientos del C. Prefecto de esta ciudad, por virtud de las razones expresadas.

Morelia, Junio 23 de 1872.—*Mariano de Jesus Torres.*—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Julio 3 de 1872.—*Isidro Aleman.*